

El Paro Nacional en Ecuador: La Lucha de un Pueblo Entre el Racismo y la Defensa de la Vida



Tomado de las redes sociales

El Paro Nacional que comenzó en Ecuador el 22 de septiembre de 2025 es mucho más que una reacción a la eliminación del subsidio al diésel. Es la expresión de una crisis estructural: un punto de inflexión donde confluyen demandas económicas, políticas de exclusión y un racismo institucional que atraviesa la relación entre el Estado y los pueblos originarios, afro y sectores populares.

Aunque la Constitución de 2008 reconoce a Ecuador como un Estado plurinacional e

intercultural, los derechos colectivos, el acceso al territorio, la libre determinación de los pueblos y la defensa de la naturaleza siguen siendo vulnerados de manera sistemática.

Escribo estas palabras desde la distancia, como mujer mestiza y migrante, que participó en las movilizaciones de 2019 y 2022, con la certeza de que vivimos en una sociedad marcada por la inequidad y la injusticia. Aunque hoy me encuentro lejos, mi corazón sigue en mi país. Este texto nace de revisar redes sociales, prensa y diversos artículos, pero, sobre todo, de la necesidad de visibilizar la resistencia y el derecho a la dignidad, incluso desde la distancia.

I. La Promesa Incumplida: Plurinacionalidad Versus Exclusión

Para entender la movilización de 2025 es necesario mirar al pasado. En 2019, la eliminación del subsidio al diésel encendió las protestas; hoy, el detonante es el mismo. El precio del galón pasó de 1,80 a 2,80 dólares, una medida que el gobierno de Daniel Noboa presenta como “necesaria” para la economía, pero que golpea directamente a los sectores rurales, indígenas y populares, para quienes el diésel es esencial en la agricultura, el transporte y la producción.

Sin embargo, las demandas van mucho más allá. La CONAIE y otras organizaciones sociales exigen la reducción del IVA, presupuestos dignos para salud y educación, y el fin de la expansión extractivista — minera y petrolera— que amenaza ecosistemas vitales como el páramo de Kimsakocha, fuente de agua para Cuenca.

Más del 30 % del callejón interandino está concesionado a empresas mineras. Estas actividades no solo amenazan territorios biodiversos, sino que despojan a las comunidades de su tierra y su agua. La situación se agrava por la desinstitucionalización del Estado, que ha debilitado el Ministerio del Ambiente y transición ecológica quitándole competencias para garantizar los derechos de la naturaleza.

Un país que no asegura el acceso a la salud y la educación está condenado a la fractura social. Las cifras son contundentes: en 2024, el 28 % de la población ecuatoriana vivía bajo la línea de pobreza, cifra que alcanzaba el 46,4 % en zonas rurales. Siete de cada diez niños indígenas crecen en la pobreza, y el 33,4 % de los menores de dos años sufren desnutrición crónica, frente al 2 % de los niños mestizos. Este abismo es la raíz de la protesta: un Estado que celebra la plurinacionalidad en el discurso, pero margina a los pueblos que sostienen la vida del país.

II. La Realidad Actual: Criminalización, Represión y la Lógica del “Terrorista”

El desarrollo del paro, que hasta hace pocos días superaba los 24 días de duración, ha tenido una respuesta estatal que evidencia el racismo, visible en la criminalización discursiva del presidente Daniel Noboa, quien calificó las protestas como actos de “vandalismo y terrorismo”, acusando a los manifestantes de tener vínculos con el crimen organizado.

Estas declaraciones no son inocentes: buscan deslegitimar la protesta, despojarla de su carácter político y situarla en el ámbito de la ilegalidad y la amenaza a la seguridad.



Tomado de las redes

La respuesta estatal se ha caracterizado por una represión violenta y el uso desproporcionado de la fuerza, documentado por organizaciones de derechos humanos que registraron más de 250 vulneraciones, con un saldo de al menos dos manifestantes indígenas fallecidos, cerca de 140 detenidos y decenas de heridos.

El estado de excepción decretado en 10 provincias suspendió garantías constitucionales y desplegó más de 6.000 militares, especialmente en los accesos a Quito, creando un cerco informativo que obstaculizó incluso el trabajo de periodistas.

En este contexto, los intentos de diálogo forzado del gobierno han mostrado su fracaso. El 15 de octubre, el anuncio de un acuerdo entre el gobierno y dirigentes de Imbabura para levantar el paro fue rechazado por las bases indígenas, que acusan al gobierno de intentar dividir a las organizaciones.

III. Los Medios: Entre el Silencio y la Estigmatización

Los medios hegemónicos han desempeñado un papel central en la construcción del relato oficial sobre el paro nacional, reforzando una narrativa que criminaliza la protesta social. A través de la generalización y la estigmatización, se ha difundido la idea de que “los indígenas” —sin reconocer su diversidad cultural y política— son sinónimo de “violencia” o “terrorismo”.

Esta reducción mediática niega la pluralidad de voces y luchas presentes en el movimiento, y contribuye a legitimar la represión estatal bajo el argumento del orden y la seguridad. Al mismo tiempo, la cobertura ha privilegiado los enfrentamientos y bloqueos, invisibilizando la dimensión masiva, organizada y mayoritariamente pacífica de las movilizaciones que se han desarrollado en todo el país.

Sin embargo, en contraste con ese cerco informativo, algunos medios internacionales y periodistas independientes han intentado desmontar las versiones oficiales. Investigaciones como la de BBC Verify mostraron, por ejemplo, que no existían pruebas que respaldaran el supuesto ataque armado al convoy presidencial, y que los daños observados correspondían más bien a impactos de piedras. Este contraste evidencia la necesidad urgente de un periodismo crítico, capaz de escuchar a las comunidades y de narrar los hechos desde el respeto a la verdad y la dignidad de los pueblos que resisten.

IV. El Arte Como Trinchera de Resistencia y Memoria



Tomado de las redes sociales

En este escenario de violencia estatal y estigmatización mediática, el arte emerge como un poderoso mecanismo de resistencia que cumple múltiples funciones vitales para el movimiento social.

El muralismo y el cartelismo callejero de artistas como Apxel, Sozapato y Vilmatraca funcionan como archivos visuales de la represión, creando memoria colectiva con murales que recuerdan a Efraín Fúez y otros afectados. Su reproducción en serigrafías y stickers garantiza la circulación y permanencia del mensaje frente al olvido institucional.

Paralelamente, la música de grupos como Mugre Sur y La Vagancia transforma los escenarios en espacios de pedagogía y catarsis colectiva, con letras que nombran la rabia y performances que cuestionan el poder.

Estas expresiones contemporáneas dialogan con obras históricas como *Huasipungo* de Jorge Icaza o las pinturas de Camilo Egas, conectando la criminalización actual con las formas históricas de explotación. Finalmente, el arte en las protestas —tambores, bailes, performance— trasciende la denuncia para convertirse en mecanismo de cuidado comunitario, fortaleciendo los lazos sociales y ofreciendo sostén emocional frente a la violencia.

V. La Mirada de la Diáspora: Entre la Preocupación y la Resistencia a la Distancia

Para mí como mujer migrante ecuatoriana en Europa, observar el conflicto desde la distancia me desgarrar el alma. En mis recuerdos veo los colores y olores del Mercado de Otavalo, los tejidos y bordados de mil colores, mientras resuena el sonido del rondador y la quena, y revivo la imagen de hombres orgullosos con ponchos azules y mujeres valientes con blusas blancas bordadas que hoy están en resistencia.

Desde esa nostalgia dolorosa, ver el racismo hacia los pueblos indígenas, afrodescendientes y sectores populares me interpela y me duele, porque como migrante también he sentido el racismo estructural, la estigmatización mediática y la negación de nuestras realidades latinoamericanas, que raramente aparecen con seriedad en los medios europeos.

Quienes vivimos en migración, con una doble ciudadanía emocional, sufrimos con angustia la militarización de ciudades como Otavalo, donde amigos y familiares describen cómo los gases lacrimógenos contaminan el aire y nublan la belleza de los paisajes andinos. Cada detención, cada noticia la vivo como la de un ser querido; el dolor me quema en la garganta.

Y, sin embargo, me siento orgullosa por la resistencia y la dignidad de mi pueblo que lucha por justicia y equidad.

En mi mente no hay desarraigo a pesar de la distancia, soy ecuatoriana, y mi memoria es mi fuerza de resistencia política, que clama por un Ecuador diverso: mercados llenos de colores, lenguas ancestrales, saberes tradicionales, sujetos políticos y actores líderes hombres y mujeres que construyen la historia y demandan equidad, lo que se opone a la narrativa reduccionista que solo muestra narcoviolencia y terrorismo.

Conclusión: Dignidad y Memoria en un Estado Plurinacional Vacío

El Paro Nacional de 2025 revela la distancia entre la promesa constitucional y la realidad racista del Estado ecuatoriano. La represión, la criminalización y el desprecio por los pueblos indígenas, afro y sectores populares son síntomas de una estructura que aún no ha aprendido a escuchar.

Pero frente a esa violencia, florecen la memoria, la palabra y el arte. Las comunidades, las mujeres y los pueblos siguen diciendo: *“Ecuador no es una hacienda.”*

La salida no está en más estados de excepción, sino en el diálogo real, la redistribución justa y el reconocimiento efectivo de la plurinacionalidad como principio político, no como postal turística.

Mientras eso no ocurra, las voces de Tránsito Amaguaña, Dolores Cacuango y de quienes cayeron en 2019, 2022 y 2025 seguirán resonando en cada mural, en cada canción, en cada tejido que proclama: *“Seguimos aquí. Seguimos luchando.”*

¡Que viva la resistencia de los pueblos y las comunas, carajo!

Renata LASSO

Mujer migrante ecuatoriana en Francia.